



**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

EXP No. 2021 00232

**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSINES- COLPENSIONES VS
PATRICIA ARANGO SALAZAR**

Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Ingresa al Despacho el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en la modalidad de **LESIVIDAD**, instaurado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES**, en contra de la señora **PATRICIA ARANGO SALAZAR**, para resolver la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por la apoderada de la entidad accionante, previa referencia a la solicitud y su trámite.

**I. Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Administrativo
Acusado:**

La apoderada Judicial de la parte actora –Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, presenta medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. SUB131014 del 18 de junio del 2020 mediante la cual Colpensiones reconoce una prestación en favor de la señora PATRICIA ARANGO SALAZAR, según la entidad accionanda, sin haberse cumplido el lleno de requisitos del acto legislativo 01 de 2005 y teniendo en cuenta información incorrecta reportada que arrojo una mesada superior a la que legalmente correspondía.

II. Trámite de la Medida Cautelar:

Mediante auto de fecha 10 de septiembre del año 2021 se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar a la señora PATRICIA ARANGO

SALAZAR por el término de cinco (5) días hábiles de conformidad con los artículos 233 y ss. del C.P.A.C.A. La notificación se efectuó de manera personal al correo de la accionada el día 28 de abril del año 2021, y el término de traslado se surtió entre el 01 de octubre de 2021 y el 07 de octubre de 2021, término dentro del cual el apoderado de la demandada presentó oposición a la medida cautelar.

Oposición a la medida cautelar: Manifiesta el apoderado de la accionada que la entidad demandante motiva su solicitud en el hecho: que corresponde a la ley 797 de 2003, por lo cual se ponderaron las cotizaciones efectuadas entre 01 de enero de 2010 al 30 de marzo de 2020, de donde se obtuvo un IBL para el año 2020 de \$6,388,685, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 76.86% teniendo en cuenta la densidad de semanas cotizadas, dando como resultado un quantum pensional actual de \$4.989.400, valor inferior al que en la actualidad devenga el solicitante de \$5.005.198". En este escenario, se considera que el operador judicial requiere realizar una serie de juicios jurídicos para determinar si efectivamente la mesada pensional se encuentra indebidamente liquidada, no se puede establecer de manera inicial que existan serios indicios que determinen de manera inequívoca la ilegalidad de la resolución demandada.

Expone que en la ponderación de intereses resulta más gravoso para la demandada la concesión de la medida cautelar de suspensión de su pensión de vejez, porque afectará sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital y móvil, más aún cuando en una eventual nulidad la entidad tiene medios idóneos para obtener la efectividad de la sentencia como lo es el proceso de cobro coactivo

Por último, enfatiza en que el monto de la diferencia alegada por Colpensiones es de \$15.548, oo para el año 2020 que origina la solicitud de medida cautelar, no puede generar la suspensión de la resolución que reconoció la pensión de vejez, dicha solicitud resulta excesiva y desborda la finalidad y el objeto del otorgamiento de las medidas previas.

para resolver se,

III. CONSIDERA:

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.CA., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C. PA.CA, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, el cual a la letra dice:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto) En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: (...)

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A. contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contraría de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Así uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contencioso administrativa,

¹ Consejo de Estado Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Expediente No. 3069, donde se especifica:

“...Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)”²

Bajo los presupuestos enunciados se absolverá la medida cautelar solicitada por la parte actora, estableciendo con claridad el concepto de la violación y haciendo un breve recuento de los actos administrativos que reconocieron y reliquidaron la pensión de vejez de la accionada, para eventualmente establecer su viabilidad.

Señala la entidad accionante, que la Resolución No. SUB131014 del 18 de junio del 2020 mediante la cual Colpensiones reconoce una prestación en favor de la señora PATRICIA ARANGO SALAZAR, según la entidad accionada, sin haberse cumplido el lleno de requisitos del acto legislativo 01 de 2005 y teniendo en cuenta información incorrecta reportada que arrojó una mesada superior a la que legalmente correspondía.

Ahora bien, de las pruebas allegadas al expediente se extrae que:

- Que mediante Resolución No. 131014 del 18 de junio de 2020, COLPENSIONES reconoció una pensión de vejez a favor de la señora ARANGO SALAZAR PATRICIA, identificada con CC No. 51,707,376 con aplicación de la ley 797 de 2003, efectiva a partir del 01 de mayo de 2020, en cuantía inicial de

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

\$4.925.891 cuya liquidación se basó en 1899 semanas, un IBL de \$6.409,747 y una tasa de reemplazo del 76.85%. Esta decisión se notificó vía electrónica el 18 de junio de 2020.

- Que la señora ARANGO SALAZAR PATRICIA, identificada con CC No. 51,707,376, solicita el 29 de septiembre de 2020 con radicación 2020_9715445 la reliquidación de una pensión de vejez, indicando que según sus cálculos su mesada pensional corresponde a \$5.154.547 por lo cual solicita el pago de las diferencias a título de retroactivo pensional.

-Que mediante auto APSUB 280 del 10 de febrero de 2021 se le solicitó a la accionada autorización para revocar la pensión de vejez ya reconocida, al encontrar la entidad que el monto reconocido es superior al que debió ser liquidado.

- Que el día 11 de marzo de 2021 con radicación 2021_2866952, la señora ARANGO SALAZAR PATRICIA, se pronunció frente a la solicitud efectuada, manifestando negativa.

Si bien COLPENSIONES argumenta que la prestación fue mal liquidada porque es contraria a derecho toda vez que no se acreditaron los requisitos del acto legislativo 01 de 2005, no se estableció con claridad la forma como debía ser liquidada la prestación y como la reliquidación de la prestación afecta ostensiblemente las normas superiores y menos se hace alusión a los requisitos específicos con los que no cumplió la accionante.

Adicionalmente, al revisar el material probatorio aportado por COLPENSIONES, este Despacho encontró una liquidación con la que pretende la Administradora sustentar la medida cautelar, pero dicha liquidación se efectuó de manera general y no permitió determinar los errores de la administración al momento de proferir la Resolución No. 102017 del 16 de junio de 2017.

Así mismo la entidad accionante manifiesta que la acción se interpone como consecuencia a que la mesada que debe percibir la actora es inferior a la que actualmente recibe, no obstante acceder a la medida cautelar implica la suspensión

de la prestación, situación que configuraría un hecho gravoso que puede afectar derechos fundamentales de la actora.

En otras palabras, esta decisión requiere de un estudio probatorio a fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación que incluye una liquidación minuciosa en aras de establecer la validez de los actos acusados al momento en que se dicte sentencia.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes de esta decisión en los correos electrónicos; parsal21@hotmail.com consultoresjuridicosasociados@hotmail.com paniaguacohenabogadossas@gmail.com notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y en los correos oficiales de la entidad accionante, en los términos dispuestos en el artículo 234 del C.P.A.C.A en concordancia con los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020

TERCERO: SE INFORMA a las partes que todas las actuaciones deberán surtir a través de los correos electrónicos de la oficina de apoyo judicial correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; correscans2@cendoj.ramajudicial.gov.co, con copia al correo oficial de este Despacho Judicial, admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co. Lo anterior, para efectos de radicación en el sistema de información siglo XXI.

CUARTO: SE INFORMA a las partes que de conformidad con el párrafo final del artículo 109 del C.G.P. *“Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término.”* Por lo que se entenderán recibidos en el correo electrónico siempre y cuando sean presentados antes de las 5 PM.

QUINTO: Se reconoce personería jurídica para actuar en nombre y representación de la parte accionada al Dr. JORGE ENRIQUE ROMERO PEREZ conforme al poder aportado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ**

cd

Firmado Por:

**Rosse Maire Mesa Cepeda
Juez Circuito
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **22fc1b98a834550bfd37cb31f24013e055de8b934257cab73aeb0d48cb312429**

Documento generado en 15/10/2021 12:42:05 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>